

LUCHAS SOCIALES Y PROCESO POLÍTICO EN BOLIVIA (1940-2010)

José Honorio Martínez Torres*

Recibido: 30 Marzo 2012 / Revisado: 15 Abril 2012 / Aceptado: 2 Mayo 2012

INTRODUCCIÓN

La victoria del Movimiento Al Socialismo (MAS) en las elecciones de 2005 coronó un ciclo de luchas populares de corta, media y larga duración. Tal victoria representó un valioso avance histórico para el campo popular al producir la ruptura de la hegemonía establecida en la conducción del Estado por parte de los sectores agroindustriales, terratenientes, burocráticos y militares, funcionales a los intereses de las corporaciones transnacionales. El MAS, organización que se concibe como instrumento al servicio de los movimientos sociales, reabrió el debate sobre las transformaciones democráticas y populares que son necesarias para allanar el camino al socialismo en Latinoamérica. El triunfo del MAS, que en términos coyunturales fue el producto del rechazo popular a las consecuencias de las políticas neoliberales, ha reactualizado —no tanto orgánica sino ideológica y programáticamente— las búsquedas progresistas de procesos políticos como los del nacionalismo en su versión militar (Busch, Villarroel, Ovando, Torres) y en su versión revolucionaria (MNR de 1952), y de la Central Obrera Boliviana (COB) y la izquierda política con la Asamblea Nacional Popular en 1971. La reiteración en la búsqueda de un proyecto político inscrito en la perspectiva del socialismo, plantea diversos interrogantes en relación a las posibles articulaciones históricas entre las luchas sociales y el proceso político, son estas articulaciones las que se intentará reconstruir en este trabajo. Para ello se analizarán distintas coyunturas de tensión y antagonismo en la disputa entre esta-

mentos, partidos políticos, clases y facciones de éstas por la construcción de una estatalidad más afín a los intereses nacionales y democrático-populares, o bien por el sostenimiento de un régimen político funcional a la dominación oligárquica e imperialista.

1. DEL NACIONALISMO MILITAR AL NACIONALISMO REVOLUCIONARIO (1937-1952)

La revolución de abril de 1952 anudó en su seno tensiones históricas de la sociedad boliviana. De una parte, condensó las expectativas de transformación social del campesinado y la clase obrera minera, de otra, sintetizó las esperanzas de democratización y progreso de la pequeña burguesía y por último, recogió los aportes de la burocracia militar que desde 1937 le apostó a un proyecto nacionalista. Es decir, el nacionalismo revolucionario resumió en la coyuntura revolucionaria una serie de anhelos del campo nacional, democratizador y popular. En la matriz ideológica de la revolución de 1952 el peso del nacionalismo fue definitorio.

El nacionalismo militar, que se gestó en el contexto de los años treinta en medio de la crisis del Estado capitalista dependiente y subsecuentemente a la derrota en la guerra del Chaco (1932 y 1935) contra Paraguay, tuvo dos expresiones muy notables, la primera entre 1937-1939 con el general Germán Busch y la segunda entre 1943-1946 con el mayor Gualberto Villarroel. Si bien ambas

* Universidad Nacional de Colombia. E-mail: jbmartinez@unal.edu.co.

experiencias fracasaron al no catalizar en la consolidación de un proyecto político progresista, ambas fueron de gran valor en términos de situar el plano de la disputa entre los intereses oligárquico-imperialistas y los nacional-populares¹.

En 1937, el gobierno del general Germán Busch, legitimado por el generalizado rechazo social al nefasto papel desempeñado por la Standard Oil durante la guerra del Chaco, nacionalizó los recursos petroleros, dando lugar a la fundación de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Busch promulgó de una nueva Constitución Política en la que se reconocieron los derechos laborales y políticos de los trabajadores y en la que fue consagrada la función directriz del Estado en la economía.

La oligarquía minera, conocida como “la rosca minera” en la que figuraban Simón Patiño, Carlos Aramayo y Mauricio Hochschild, no aceptó la instauración del *proyecto progresista* impulsado por Busch y actuó conspirativamente para revertir el control del gobierno a sus intereses. En agosto de 1939, Busch se suicidó y el gobierno quedó en poder de la tendencia pro-oligárquica de las Fuerzas Armadas. Los generales adeptos a la dominación oligárquica –Carlos Quintanilla (1939-1940) y Enrique Peñaranda (1940-1943)– mantuvieron el gobierno hasta diciembre de 1943, cuando un nuevo golpe de Estado devolvió el poder estatal a las fuerzas progresistas.

El golpe fue encabezado por el mayor Gualberto Villarroel, quien contó con el apoyo de una logia de las Fuerzas Armadas denominada “Razón de patria” (Radepa) y del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR). Villarroel retomó las políticas de Busch encaminadas a la modernización capitalista del Estado; su gobierno trató de reformular, mediante la vía impositiva, las relaciones entre el Estado y las grandes compañías mineras del estaño articuladas a los intereses del capitalismo británico y estadounidense; de igual modo, enfrentó a la clase terrateniente al suprimir

el pongueaje o trabajo gratuito de los indios para los hacendados.

El enfrentamiento de Villarroel con la rosca minera y la clase latifundista dio lugar a una nueva conspiración. El 21 de julio de 1946, luego de dos intentos frustrados de golpe de Estado², Villarroel fue derrocado por un golpe la que participaron altos mandos militares (Pinto, Arenas, Mercado), “la rosca minera”, el Partido de Izquierda Revolucionaria (PIR) y el Partido Obrero Revolucionario (POR)³. La convergencia de los tres primeros dio lugar al Frente Democrático Antifascista, el cual orientó las acciones de protesta de los sectores estudiantiles, que legitimaron la caída del gobierno con el colgamiento de Villarroel.

La sucesión de gobiernos militares defenestrados por sus propios compañeros de armas reflejaba el inmenso poder de la institución militar en el control del aparato estatal, pero a la vez mostraba las profundas divergencias de intereses e ideologías existentes en su interior. Mientras que los gobiernos de Busch y Villarroel se caracterizaron por sus propósitos nacionalistas, populistas y reformistas, los de Quintanilla, Peñaranda y Urriolagoitia se distinguieron por la restauración oligárquica y reaccionaria.

Ante la debilidad orgánica de la burguesía boliviana, las Fuerzas Armadas mantuvieron un enorme poder decisorio en la conducción del Estado hasta 1952. Los constantes golpes militares y magnicidios se manifestaron como resultado de la precariedad del régimen político, del marcado caudillismo y la incapacidad del estamento militar para integrar a las clases populares a la participación política; todo ello se traducía en una constante expresión de tensiones y contradicciones entre los sectores identificados con la conformación de una nueva estatalidad (militares nacionalistas y pequeña burguesía) y el bloque dominante (oligarquía minera y latifundistas) interesado en sostener el orden vigente. En este cuadro de antagonismo social tomaron parte la clase obrera y el campesinado, ambos movilizados en los partidos políticos que

¹ René Zavaleta, *Bolivia: el crecimiento de la idea nacional*, La Habana, Casa de las Américas, 1967, 24.

² El primer intento de golpe de Estado tuvo como epicentro la ciudad de Oruro y se produjo entre el 18 y el 20 de noviembre de 1944. Los militares y civiles que participaron en el golpe fueron fusilados. El segundo intento de golpe de Estado ocurrió el 13 de junio de 1946, en esta ocasión fue bombardeado el Palacio presidencial, en los enfrentamientos murieron 5 militares. Ver al respecto: *Villarroel y el atisbo de la revolución nacional*, de René González Torres, La Paz, Artes gráficas Don Bosco, 1982.

³ Andrés Soliz Rada, “Participación del POR en el colgamiento de Villarroel”, *Revista Patria Grande*, La Paz Bolivia, No.3 Octubre de 1985. Disponible en: [www.patriagrande.org.bo] (Con acceso el 23-12-10).

fueron fundados en la década del cuarenta (el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), el Partido Obrero Revolucionario (POR), el Partido de Izquierda Revolucionaria (PIR) y la Falange Socialista Boliviana (FSB).

El movimiento obrero emergió con notoriedad en los años cuarenta con la fundación de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTM)⁴ en junio de 1944, y el movimiento campesino con la realización del primer Congreso Indígena en mayo de 1945. El desarrollo orgánico del sindicalismo estuvo posibilitado por la apertura política lograda durante el gobierno de Villarroel, sus antecesores inmediatos se habían caracterizado por la represión ejercida sobre el movimiento obrero y campesino en defensa de los intereses de “la rosca minera”, así lo demostraron las masacres de Catavi en diciembre de 1942, de Potosí en 1947 y de Huanuni en mayo de 1949⁵.

El nacionalismo de las Fuerzas Armadas bolivianas tuvo correlatos similares en México y Argentina; es el caso de los gobiernos de Lázaro Cárdenas entre 1934-1940, y Juan Domingo Perón entre 1946 y 1955, respectivamente. Estos regímenes se caracterizaron por el impulso al papel empresarial del Estado. Con un elevado componente ideológico de nacionalismo y desarrollismo, los regímenes populistas lograron la legitimación del Estado dependiente y cooptaron la movilización popular. Sin embargo, los gobiernos de Busch y Villarroel, dada su brevedad, no alcanzaron a configurar el conjunto de elementos –partido y sindicato de Estado, corporativismo, entre otros,– presentes en los populismos latinoamericanos.

2. AUGE Y CAÍDA DEL NACIONALISMO REVOLUCIONARIO: MNR 1952-1964

El nacionalismo revolucionario tuvo a las

masas en su favor y en esa medida resolvió un problema que el nacionalismo militar no acometió, el problema de la legitimación popular. Con un gran respaldo popular el MNR desplegó una gestión que inicialmente satisfizo las esperanzas de la clase obrera minera y campesina que le respaldó en la insurrección. Sin embargo, a medida que pasaron los años, el MNR acabó dando la espalda a los intereses populares al ser sometido en el diseño su política económica y de seguridad por el gobierno estadounidense.

El nacionalismo revolucionario es un término para distinguir la gestión del MNR a lo largo de tres períodos completos de gobierno; Paz Estenssoro (1952-1956), Siles Zuazo (1956-1960), Paz Estenssoro (1960-1964), y uno iniciado; Paz Estenssoro (1964-1968). El empleo de este término para catalogar los períodos de gobierno del MNR no implica que estos hayan seguido una perspectiva similar en cuanto a su formulación inicial. O mejor, en el curso de los años 1952 a 1964, el nacionalismo revolucionario del MNR sufrió una metamorfosis en la cual abandonó los postulados nacionalistas para abdicar ante las imposiciones políticas del gobierno estadounidense.

La primera etapa del nacionalismo revolucionario va de 1951 a 1956; en este período, el MNR pasó de organizar una insurrección en contra de la ilegítima junta de gobierno, instalada en 1951 después del desconocimiento oficial a la victoria de Víctor Paz Estenssoro (MNR) en las elecciones presidenciales, a aceptar el conjunto de imposiciones del gobierno estadounidense para garantizar la aprobación de préstamos. La segunda etapa corresponde al período de 1956 a 1964, cuando el MNR profundizó la dependencia económica y militar ante el gobierno estadounidense.

El MNR se organizó a partir de un núcleo de jóvenes profesionales provenientes de la pequeña

⁴ Sobre la constitución del movimiento obrero dice Toranzo: Para la clase obrera, la única posibilidad práctica de desarrollarse y educarse fue el enfrentamiento directo con la clase dominante y, en especial, con el aparato represivo de la burguesía; se vio forzada a tener por escuela las calles, manifestaciones, huelgas, dinamita, fusiles, toma de rehenes y una serie de métodos de lucha en los que estaba involucrada toda la clase o la mayoría de ella, por lo cual, de manera imperceptible, estuvo labrando su camino hacia la insurrección popular, arrastrando en esa dirección a las masas de los explotados. Se trata de una clase que, en lo fundamental, no pudo tomar los cursos de política dentro de los “aparatos” que para tal efecto le pudiera proporcionar una democracia burguesa; antes bien, frente a la ausencia de ellos, tuvo que forjarse sus propios mecanismos de educación y de lucha. Por ello es que el sindicato, las federaciones sindicales, sus centrales obreras y, obviamente, sus partidos - que fueron los impulsores de las organizaciones mencionadas- son los centros básicos donde surge su alfabetización política. Carlos Toranzo Roca, “Obreros y militares en Bolivia: un golpe frustrado”, *Revista Cuadernos Políticos*, No.23 México enero-marzo de 1980, 101. (Con acceso el 10-01-11).

⁵ Ver al respecto: José Fellamn Velarde, *Historia de Bolivia*, La Paz, Los amigos del libro, 1974.

burguesía; al decir de Zavaleta, se trataba de jóvenes políticos que: “De un modo u de otro tenían que ver con la propia casta política a la que trataban de derrocar. En su mayoría hijos de expresidentes o de gerentes de empresas quebradas, en fin, toda una gama de parientes pobres de la oligarquía que ya no creían en la propia oligarquía [...] el programa de aquella pequeña burguesía era la unidad nacional, la construcción del Estado nacional y entendido todo eso como la reconstrucción de la burguesía pero esta vez en términos nacionales, es decir, globales”⁶.

En 1943 el MNR participó en el golpe militar que llevó al gobierno al mayor Villarroel, en éste, Víctor Paz Estenssoro se desempeñó como Ministro de Hacienda. Después de la purga que se produjo en las Fuerzas Armadas con el derrocamiento de Villarroel, diversos miembros de la logia militar que componía Radepa pasaron a apoyar al MNR en su proyecto político. En 1951, luego del desconocimiento de los resultados electorales que daban ganador a Paz Estenssoro, el MNR, en alianza con la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) pasó a organizar la insurrección popular. De ese modo se gestó una masiva insurrección popular que el 9 de abril de 1952 enfrentó y derrotó al gobierno de las Fuerzas Armadas.

“Explotando las condiciones que venían del prolongado proceso de disolución del poder oligárquico, –Juan– Lechín –presidente de la COB– comprometió en la conspiración inicial nada menos que a –Antonio– Seleme, ministro del Interior y, sin duda, el segundo hombre del régimen. Trabado el combate, Seleme no pudo menos que entregar algunos centenares de fusiles que fueron a dar a manos de los fabriles de La Paz y los mineros de Milluni, que habían sido masacrados con crueldad en 1950 (...) El ejército había sido disuelto por la insurrección misma y el general Torres Ortiz, su comandante tuvo que ren-

dirse formalmente en Lajas, a unos 20 kilómetros de La Paz”⁷.

El triunfo insurreccional llevó al gobierno a Víctor Paz Estenssoro quien realizó una serie de tareas democráticas presentadas en su programa: nacionalización de las minas, reforma agraria (1953) y universalización del voto (1954). La labor del MNR en el gobierno fue secundada por la Central Obrera Boliviana (COB)⁸ que tuvo a cargo de la dirección de cuatro ministerios.

En octubre de 1952, la recién creada Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) controlaba el 66% de la explotación del estaño, y el número de trabajadores que la constituía se había incrementado, pasando de 23.000 a 39.000. Pese a esto, la dependencia frente al funcionamiento del “mercado mundial” se mantenía intacta, mientras Bolivia producía estaño a 1,4 dólares la libra, su precio en las principales bolsas del mundo, debido al restablecimiento de los niveles de producción del mineral por parte de Corea, era de 0,75 dólares la libra⁹. El mantenimiento de un modelo primario exportador habría de consolidar las condiciones para la acentuación del capitalismo dependiente.

Tanto la nacionalización de las minas como la disolución de latifundios, entre 1953 y 1954 fueron tituladas siete millones de hectáreas de tierra, generó una alta carga presupuestaria, ya que el gobierno boliviano, por imposición del gobierno estadounidense, debió pagar elevadas indemnizaciones.

El MNR se embarcó en la estrategia desarrollista promovida por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), esta estrategia tuvo un antecedente importante en el Plan Boham propuesto en 1942¹⁰. La noción de desarrollismo alude críticamente a la versión del desarrollo nacional autónomo promovida por la CEPAL en la década del cincuenta. Tal concepción implicaba que: “a partir de medidas correctivas aplicadas al comercio

⁶ René Zavaleta, “Consideraciones generales sobre la historia de Bolivia”, en *América Latina historia de medio siglo*, México, Siglo XXI, 88-102.

⁷ *Ibid.*, 98-99.

⁸ Fernando Arauco, “Sobre la COB”, *Cuadernos Políticos*, No. 4 Septiembre de 1975, 83-91. Disponible en: [<http://www.cuadernospoliticos.unam.mx/cuadernos/contenido/CP4/CP4.8Arauco.pdf>] (Con acceso el 08-01-11)

⁹ Juan Combo, “Bolivia bajo el modelo de Banzer”, *Revista Controversia* No.55 de 1977, Bogotá, Cinep, 20.

¹⁰ El Plan Boham fue el Informe de la Misión Económica de los Estados Unidos a Bolivia, presidida por Mervin L. Bohan, y su texto original fue redactado en inglés para ser presentado al Secretario de Estado en agosto de 1942, con miras a obtener créditos y asistencia técnica para la construcción de infraestructura y el fomento agropecuario. Ver al respecto: *El desarrollo del Occidente boliviano: trayectoria pasada y escenarios futuros posibles*, Instituto Prisma La Paz mayo de 200.

internacional y la implementación de una adecuada política económica, los países subdesarrollados verían abiertas las puertas de acceso al desarrollo capitalista pleno, poniendo fin a la situación de dependencia en que se encontraban”¹¹. La CEPAL promovía una política de industrialización basada en la sustitución de importaciones de bienes manufacturados. Por ello, Marini insistió en catalogar el desarrollismo como la “ideología de la burguesía industrial latinoamericana”, la cual trataba de ampliar su influencia económica recurriendo a alianzas con el proletariado industrial y la clase media asalariada.

En el marco de las políticas cepalinas, el gobierno de Paz Estenssoro utilizó la Corporación Boliviana de Fomento con el fin de apalancar el crédito industrial; al cabo de pocos años, esta entidad quedó sujeta a los mandatos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del gobierno estadounidense. El pago de indemnizaciones a la oligarquía minera y terrateniente incrementó la deuda del Estado subordinándolo a la banca prestamista. En 1958 un tercio del presupuesto público era cubierto con préstamos estadounidenses¹². La sujeción financiera se tradujo en dependencia política y el gobierno del MNR acabó sometido a las orientaciones recibidas desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos, una de ellas fue la reorganización de las Fuerzas Armadas bajo sus mandatos.

En el proceso de reconstrucción de las Fuerzas Armadas: “La revolución nacional reorganizó el ejército con las armas norteamericanas, los uniformes norteamericanos, los reglamentos norteamericanos y, obviamente la doctrina norteamericana [...] la presencia del imperialismo norteamericano se hizo invencible en su crecimiento y no es sino una derivación de este momento el que todos los egresados del nuevo Colegio Militar pasaran a entrenarse en la zona del Canal –de Panamá–, el que a partir de cierto momento no hubiese un solo ministro del Interior que no acabase por trabajar

con la inteligencia norteamericana o que los gerentes de las empresas norteamericanas, como la Grace, resultaran ser a la vez dirigentes de la empresa minera estatal”¹³.

El nacionalismo revolucionario en la búsqueda por instaurar unas plenas relaciones capitalistas colocó todo su empeño en la formación de una burguesía nacional lo que dio al traste con el abandono de los contenidos revolucionarios. Para Zavaleta, cuando la pequeña burguesía en el gobierno: “Se ve acorralada y arrinconada (por la propia ecuación clasista, por la eternidad aparente del instante estatal) utiliza el Estado no sólo para convertirse ella misma en burguesía sino también para reconstituir a la clase dominante como tal, pensando que no había más remedio que hacer eso. [...] La COMIBOL se convirtió en un centro de acumulación capitalista y es a partir de ella que se crea la nueva burguesía minera (la llamada minería mediana) que se convertirá en uno de los dos polos centrales de la burguesía post 1952”¹⁴.

En un lapso de cuatro años, el gobierno del MNR se distanció de la clase obrera para cumplir las condiciones exigidas por los acreedores. En 1956, al momento de tomar el gobierno Hernán Siles Zuazo, las finanzas y el comercio se encontraban en una situación inoperante ante el exacerbado incremento del tipo de cambio, el cual pasó de 40 bolivianos por dólar a 14.000 en el curso de pocos días, bajo estas circunstancias, el gobierno aceptó la ejecución de un plan económico a instancia del gobierno estadounidense. Siguiendo las directrices del asesor norteamericano George Jackson Eder el gobierno asumió la implementación del Plan de Estabilización Monetaria que implicaba “la imposibilidad de desarrollar la industrialización en torno a la minería y que condenaba a las empresas del estatales a no ser otra cosa que simples centros de acumulación de la nueva burguesía”¹⁵.

El Plan de Estabilización Monetaria fue rechazado por el movimiento sindical, esto determinó su alejamiento coyuntural del gobierno desde 1956

¹¹ Ruy Mauro Marini, “La crisis del desarrollismo”, en *La teoría social latinoamericana*, Tomo II, México, El Caballito, 1994, 143.

¹² Fernando Mires, “Bolivia: la revolución obrera que fue campesina”, en *Las revoluciones sociales en América Latina*, México, Siglo XXI, 2005, 262.

¹³ René Zavaleta, “Consideraciones generales sobre la historia de Bolivia”, en *América Latina historia de medio siglo*, México, Siglo XXI, 109-116.

¹⁴ *Ibíd.*, 104-108.

¹⁵ *Ibíd.*, 112.

hasta 1960, cuando el secretario ejecutivo de la COB, Juan Lechin, hizo una nueva alianza con el MNR para formar parte de la fórmula electoral como vicepresidente de Víctor Paz Estenssoro.

Para la derecha representada en la Falange Socialista Boliviana (FSB), la inflación era el resultado de las concesiones gubernamentales a la clase obrera. Para expresar su rechazo al gobierno, la FSB intentó un golpe de Estado el 19 de abril de 1959, en el que perdió la vida el fundador y jefe de este movimiento, Óscar Ungaza de la Vega.

La penetración estadounidense en el gobierno del MNR se completó cuando Paz Estenssoro aceptó al general René Barrientos como fórmula vicepresidencial. Éste estaría a cargo de poner el sello final a un período que fue caracterizado por el auge del nacionalismo y su paulatino declive. La re-toma del Estado por parte de las Fuerzas Armadas siguió un curso metódico que se intensificó a partir de 1957, cuando la intervención militar se hizo indispensable para controlar los sucesivos levantamientos “cívicos” del Oriente.

El embajador estadounidense Douglas Henderson puso contra la pared a Paz Estenssoro, recién asumido su tercer mandato, cuando le pidió la toma y control militar de los distritos mineros por parte de los funcionarios norteamericanos, en aplicación del “Plan Triangular”. El gobierno de Paz Estenssoro, dubitativo de llevar a cabo esta medida por lo que significaba en términos de pérdida de respaldo político de las bases sindicales, dilató la intervención en las minas hasta su caída en 1964, cuando el dictador Barrientos militarizó los distritos mineros.

Las contradicciones del nacionalismo revolucionario en su esfuerzo por conciliar los intereses de la pequeña burguesía, del gobierno estadounidense y las clases populares acabaron por colapsar el gobierno del MNR. El desenvolvimiento del nacionalismo revolucionario puso en evidencia su carácter contradictorio, entre el plano discursivo y las realizaciones concretas, a nivel retórico defendía el desarrollo nacional pero en la práctica se rendía ante los mandatos del FMI y el gobierno estadounidense, a nivel discursivo fomentaba la movilización y la organización obrera, pero en la práctica estaba comprometido con la acumulación monopólica de capital en los centros metropolitanos.

Las contradicciones entre el plano discursivo y las ejecutorias prácticas llevaron al nacionalismo revolucionario a tensiones que se saldaron con la instauración de regímenes dictatoriales. El nacionalismo revolucionario, el cual pensaba Zavaleta, se asimilaría “en la oposición y la lucha entre las clases nacionales y las clases extranjeras”¹⁶, acabo por revelarse estrecho y temeroso en sus miras.

3. DICTADURAS REACCIONARIAS Y ARRASAMIENTO DEL MOVIMIENTO POPULAR (1964-1969/1971-1982)

Las ambigüedades de la pequeña burguesía en la dirección el Estado le dieron la oportunidad al gobierno estadounidense de penetrar el aparato de Estado para ponerlo en función de sus intereses geopolíticos desde mediados de los años sesenta. Prácticamente, entre 1964 y 1982 el Estado boliviano estuvo dirigido por las Fuerzas Armadas con el respaldo de la oligarquía y los sucesivos gobiernos estadounidenses. En ese mismo período una parte considerable de los estados de América Latina vivió experiencias similares, las cuales estuvieron articuladas a la doctrina estadounidense de la seguridad nacional.

El intervencionismo de los Estados Unidos en la región se ahondó en 1964 con el golpe militar en Brasil continuando con el de Bolivia y años más tarde el de Chile (1973), Uruguay (1973) y Argentina (1976). La estrategia militarista estuvo orientada en todos los casos a suprimir el avance de las luchas obreras y populares en toda la región, y a revitalizar los procesos de acumulación de capital a favor de los intereses de los monopolios transnacionales.

El gobierno de Paz Estenssoro fue derribado el 4 de noviembre de 1964 por un golpe de Estado dirigido por su propio vicepresidente, el general René Barrientos. La resistencia al golpe fue reprimida causando cien muertos en la ciudad de La Paz.

Uno de los aspectos cruciales de la estrategia norteamericana radica en la gestación de una base social que legitimó los regímenes dictatoriales. Esta base estuvo compuesta por el campesinado, el cual tomó distancia respecto de las orientaciones de la COB.

¹⁶ René Zavaleta, *Bolivia: el crecimiento de la idea nacional*, La Habana, Casa de las Américas, 1967, 42.

El régimen de Barrientos se fundó en lo que se conoció como el “pacto militar-campesino”¹⁷, es decir: “entre el sector menos politizado del movimiento democrático y el sector de la burocracia estatal más penetrado por el imperialismo. [...] el proyecto norteamericano para Bolivia consistía en suprimir sus focos de independencia clasista o democracia política, como los mineros y la izquierda como tal, y construir una dictadura a la manera de Trujillo, Somoza o Strossner”¹⁸.

Al establecimiento del funesto pacto contribuyeron tres aspectos; primero, el descontento del movimiento campesino, en particular cochabambino, ante la hegemonía obrera en la dirección del movimiento sindical, segundo, la relación establecida desde los inicios de la revolución entre los militares del MNR y las milicias campesinas encargadas de mantener el nuevo orden y, tercero, la legitimación que alcanzaron las Fuerzas Armadas por su intervención mediadora en los conflictos cacicales entre comunidades campesinas del Valle y el Altiplano. Con René Barrientos, esta labor tuvo su punto más alto en la pacificación de El Valle del año 1963.

“El pacto militar campesino” fue sostenido mediante la entrega vertiginosa de prebendas, es decir, el otorgamiento de recursos, bienes y servicios del Estado a través de mecanismos clientelares, entre los que destacó el Plan de Acción Cívica¹⁹

puesto en ejecución desde 1960, y administrado posteriormente por Barrientos desde la vicepresidencia con apoyo financiero de la embajada estadounidense.

La financiación del Plan de Acción Cívica provenía de fuentes como la Agencia del Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID), la Alianza para el Progreso, las donaciones que se hacían a favor del ejército, y un fondo propio del ejército destinado para ese fin.

Según Soto: Los planes de Acción Cívica fueron parte de un proyecto de carácter continental y nacieron en 1960 fecha cargada de significaciones y no meramente gratuita. La política exterior norteamericana, dentro del esquema de la guerra fría y del esquema de la contención del enemigo comunista, dentro y fuera de sus fronteras, estaba dirigida a bloquear todo intento revolucionario en el continente, tratando de abogar política e ideológicamente los efectos catalizadores que podía tener la revolución cubana. Es decir que el programa de Acción Cívica emerge con el contexto y forma parte de una estrategia y doctrina contrainsurgente inspirada por EEUU y penetrada, a través de sus agentes en el interior de las Fuerzas Armadas de cada uno de los países latinoamericanos²⁰.

El abandono del proyecto nacionalista revolucionario fue capitalizado por las Fuerzas Armadas

¹⁷ El Pacto... va contra todo intento anarquizante y disociador que pretende, en el seno de la militancia movimientista, crear sectores, bloques o frentes u otras organizaciones al margen de lo prescrito en el estatuto orgánico del partido.

Se observarán las siguientes condiciones:

- 1.- Garantizar y defender la estabilidad y el ejercicio pleno de sus funciones a los integrantes de los organismos directivos del partido legalmente constituidos.
- 2.- Defender los intereses sociales, económicos y políticos de los miembros que suscriben el presente documento.
- 3.- Mantener por todos los medios la compactación de estas fuerzas para la continuidad revolucionaria.
- 4.- Propugnar trabajo, disciplina, orden y honestidad para asegurar la diversificación económica del país.
- 5.- Garantizar por todos los medios, la paz social y política como la única forma de lograr la grandeza del pueblo boliviano.
- 6.- Combatir las doctrinas extremistas que atentan contra los principios de libertad y nacionalidad.

Firman el documento 48 personas representantes de diferentes organizaciones.

Ver al respecto: César Soto, *Historia del pacto militar campesino*, Cochabamba, Ceres, 1994. Disponible en: [<http://sala.clacso.org.ar/gsdl/cgi-bin/library?e=d-000-00—0ceres—00-0-0—0prompt-10—4—0-11—1-es-50—20-preferences—00031-001-1-0gbk-10&a=d&c=ceres&cl=CL1&d=HASH788110e32f15f4866e0a34>] (Con acceso el 20-12-10).

¹⁸ René Zavaleta, “Consideraciones generales sobre la historia de Bolivia”, ... Op. cit., 120.

¹⁹ El Plan de Acción Cívica tenía un amplio número de programas, entre los cuales figuraron los siguientes: construcción, mejoramiento y mantenimiento de carreteras y caminos vecinales, construcción de escuelas, colegios; remodelación y mantenimiento de los mismos, abastecimiento de agua y construcción de piletas, distribución de alimentos en zonas rurales, construcción de postas sanitarias, arbitraje en problema de campesinos, ejecución de programas ejecutivos y de alfabetización, ejecución de programas recreativos y deportivos, demostración de espectáculos para recaudar fondos para obras sociales, entrega de alimentos en albergues y asilos, disposición de vehículos para transporte de materiales de construcción de escuelas, postas, etc., construcción de tajamares y canales de regadío, asistencia y socorro ante calamidades públicas, control de insectos y roedores y control sanitario de alimentos y bebidas.

²⁰ *Ibid.*, César Soto, *Historia del pacto militar campesino*, Cochabamba, Ceres, 1994.

para recapturar el aparato estatal, pero esta vez, la institución militar se arropó de legitimidad otorgada por el campesinado. Del mismo modo como el gobierno estadounidense y la CEPAL le ganaron la partida al nacionalismo revolucionario en la determinación de la política económica, las Fuerzas Armadas le sustrajeron al MNR la parte más considerable, en términos cuantitativos, de su base social. El campesinado pasó de ser la base social de la revolución, a ser la base social de la represión dirigida al movimiento popular. Entre las acciones represivas y genocidas más significativas del período 1964-1969 figuraron: las masacres en los enclaves mineros de Llallagua, Siglo XX y Cataví en septiembre 1965, y la masacre de San Juan²¹ en junio de 1967, para aplastar la resistencia de los trabajadores de los distritos mineros de Oruro y Potosí y el aniquilamiento de los movimientos insurgentes (la guerrilla del Che²² y la de Teoponte²³) entre 1967 y 1969.

Después de la muerte del dictador Barrientos, en el breve interin entre 1969 y 1971, por la vía de las componendas institucionales y la instrumentalización de la movilización social, gobernaron Luis Adolfo Siles Salinas, y posteriormente, los generales Alfredo Ovando y Juan José Torres, quienes realizaron algunas reformas de corte nacionalista y democrático como la re-nacionalización de los hidrocarburos y la Asamblea Nacional Popular.

El 26 de septiembre de 1969, las Fuerzas Armadas a la cabeza de Ovando se hicieron cargo del poder mediante un golpe de Estado. Ovando modificó el discurso militar introduciendo nuevos elementos que estaban esbozados en el "Mandato Revolucionario de las Fuerzas Armadas". El gobierno de Ovando abrogó el Código Petrolero y la ley de seguridad de Estado. Teniendo a Marcelo Quiroga como Ministro de Hidrocarburos, llevó a cabo la nacionalización de la compañía Gulf Oil, la cual había recibido grandes beneficios para la explotación petrolera de la dictadura Barrientos.

En octubre de 1970, a fin de responder a un muy probable golpe de los sectores reaccionarios dentro de las Fuerzas Armadas, el general Juan José Torres tomó el mando del gobierno incorporando al movimiento sindical en su gobierno. La toma del gobierno por parte del general Torres fue posibilitada por el auge del movimiento popular al final de la década de los sesentas e inicio de los setentas, del cual fueron muestra la realización de los Congresos de la FSTMB y de la COB y la construcción del Comando Político del Pueblo, que sirvió como impulsor de la Asamblea Popular.

La izquierda política (Partido Comunista Boliviano, Partido Obrero Revolucionario, Partido Revolucionario de Integración Nacional, Movimiento de Izquierda Revolucionaria) y la clase obrera (COB) impusieron al gobierno de Torres la constitución de la Asamblea Nacional Popular (ANP) el 1° de mayo de 1971, hecho que constituyó un avance cualitativo en la perspectiva de construcción de poder popular.

La negativa del presidente Torres a formar milicias populares que respaldaran su gobierno cuando las amenazas conspirativas se acrecentaban, dio al traste con su mandato²⁴. El general Juan José Torres, quien fue apoyado por el alto mando militar dentro de una estrategia institucional de contención y cooptación del movimiento popular, fue derribado cuando fracasaba en dicho empeño, pues rápidamente fue rebasado por el ímpetu de las iniciativas populares. Al decir de Lora, quien hizo parte de la dirección de la ANP: "el plan contrarrevolucionario consistió en quitarle a Torres todo apoyo militar y en vísperas del 20 de agosto el presidente muy difícilmente era obedecido por el 20% de los mandos militares"²⁵.

La pugna entre la corriente nacionalista democrática y la corriente oligárquica y pro-imperialista al interior de las Fuerzas Armadas se decidió a favor de la segunda el 21 de agosto de 1971 mediante el golpe militar del coronel Hugo Banzer.

²¹ Víctor Montoya, "La masacre de San Juan", [http://www.rebellion.org/noticia.php?id=52404] (Con acceso el 21-08-09)

²² El texto: "Ñacahuasu: la guerrilla del Che en Bolivia" de José Luis Alcázar presenta una excelente crónica testimonial sobre los acontecimientos.

²³ Ver al respecto: Gustavo Rodríguez Ostría, *Teoponte la otra guerrilla guevarista en Bolivia*, Cochabamba 2006.

²⁴ Luego de un documentado análisis Alcázar concluye que el golpe a Torres tuvo dos causas básicas: "1) El carácter de equilibrio del propio gobierno de Torres, incapaz de rebasar los marcos del reformismo y del institucionalismo castrense, incluso, cuando éste atentó contra su estabilidad. 2) El menosprecio por parte de la izquierda del desarrollo armado de las masas". Alcázar, José Luis, *Bolivia otra lección para América Latina*, Era, México 1973, 179.

²⁵ Guillermo Lora, *Bolivia: de la Asamblea Popular al golpe del 21 de agosto*, Santiago, OMR ediciones, 1972, 89.

Banzer fue el primer militar boliviano aceptado en la escuela de blindados de Fort Knox, recibió una condecoración al mérito militar del ejército norteamericano, en 1963 ocupó el cargo de agregado militar en la embajada boliviana en Washington, y posteriormente, fue ministro de educación de la dictadura de René Barrientos, a fines de los años sesenta se hizo célebre por su participación en la organización de grupos paramilitares (rangers) para combatir la insurgencia.

La tendencia reaccionaria de las Fuerzas Armadas, liderada por el general Miranda y secundada por los generales Mendieta y Selich, tomó el poder del Estado en una sangrienta acción militar que dejó más de cien muertos entre los sectores de civiles y militares que resistieron el golpe militar. Este hecho fue legitimado por un MNR derechizado, el expresidente Paz Estenssoro exiliado en Perú desde 1964 dio un respaldo fundamental a la dictadura, y por la Falange Socialista Boliviana (FSB) encabezada por Mario Gutiérrez. A nivel regional, el golpe contó con el respaldo de las dictaduras de Brasil, Chile y Paraguay. En la preparación del golpe fue muy importante el papel de la dictadura brasileña, la cual envió en diversas oportunidades durante el año 1970, al general brasileño Hugo Bethlem a La Paz para acordar con los militares bolivianos los planes dirigidos a frenar los avances populares en Bolivia.

La dictadura ilegalizó los partidos de izquierda, suspendió la COB, cerró las universidades públicas y decretó el Estado de sitio. La represión sobre el movimiento popular se expresó en el asesinato y desaparición de 500 personas y la detención y el exilio de 10 mil. Uno de los muertos fue el expresidente Juan José Torres, quien cayó asesinado en Buenos Aires en 1976 dentro de las operaciones del Plan Cóndor²⁶.

Para Lora: “el golpe estaba dirigido contra la Asamblea Popular, contra la co-participación obrera mayoritaria en COMIBOL, contra la estructuración de la Universidad Única bajo la dirección hegemónica de la clase obrera, contra la perspectiva de estructurar el gobierno propio del proletariado, etc.”²⁷.

La dictadura se legitimó en el “pacto militar-campesino”, siendo Banzer: Proclamado líder del campesinado boliviano en una concentración campesina en Punata, donde se hizo entrega de los símbolos del mando: el bastón, el lluchu y el pututu. Posteriormente continuó con una serie de proclamaciones en Oruro, La Paz, Potosí y Chuquisaca [...] Es muy difícil asegurar que el campesinado haya apoyado al golpe de Banzer de manera activa. Aunque la prensa afirmó que muchos milicianos de Cochabamba se dirigieron a Oruro a combatir sin entrar en acciones, es presumible que el campesinado en su conjunto haya sido nada más que un espectador que veía cómo se iban desarrollando los acontecimientos sin participar directamente en ellos. Luego, y fieles a la costumbre y se reconocieron en el nuevo gobierno proclamando a Banzer “fiel seguidor de Barrientos”²⁸.

Entre las principales políticas económicas agenciadas por la dictadura de Banzer, figuraron el creciente endeudamiento externo (de 400 a 2500 millones de dólares entre 1971 y 1978), la concesión de los recursos energéticos a la dictadura brasileña, el apoyo a la consolidación terrateniente y agroindustrial en el Oriente, la supresión de los logros del movimiento obrero en materia de política social y su participación burocrática dentro del Estado.

Durante la dictadura de Banzer el flujo de recursos al Estado que provinieron del endeudamiento externo se destinaron a financiar la consolidación del desarrollo agroindustrial en el Oriente del país. En los años setenta: En Santa Cruz se ofrecían tierras “baldías” (hoy sabemos que dichas tierras pertenecían a los pueblos indígenas) para su venta a través de una apócrifa compañía llamada Anglo Bolivian Land & Cattle Co., con dirección comercial en Vermont, EU. Un anuncio publicado en varios periódicos influyentes como The Financial Times (8 de febrero de 1977), The Wall Street Journal (3 de junio de 1976) y The New York Times (4 de diciembre de 1974) atestiguan este intento de acaparamiento que tasó la tierra a 18 dólares las 2.4 hectáreas²⁹.

Departamentos como Pando y Beni, que fueron muy importantes en la época del auge cauche-

²⁶ Ver al respecto: Stella Calloni, *Operación Cóndor: pacto criminal*, La Habana, Ciencias Sociales, 2006.

²⁷ Guillermo Lora, *Bolivia: de la Asamblea Popular al golpe del 21 de agosto*, ... Op. cit., 134.

²⁸ César Soto, *Historia del pacto militar campesino*, Cochabamba, Ceres, 1994.

²⁹ Guillermo Delgado, “Los entenados de Banzer y Barbie”, *Revista Memoria* No. 235 de 2009. (Con acceso el 21-08-09).

ro a principios del siglo XX, reingresaron en “la historia nacional” luego de un sistemático proceso de desposesión acompañado de odio racial y clasista, extendiéndose nuevamente el cultivo del caucho y la ganadería extensiva.

Hacia 1980, “El carnicero de Lyon, Klaus Barbie, figuraba como miembro activo del ejército nacional y Bolivia fue su *Hotel Terminus*. Era la primera vez que el fascismo militarista se instituía como ente transnacional ligado a la cocaína”³⁰. La gestión de Banzer fue complementada por nuevas dictaduras genocidas como las del general Alberto Natusch Busch en 1979 y el general Luis García Meza en 1980.

La movilización popular en rechazo a la dictadura, por ejemplo la huelga de mujeres mineras³¹ en 1977, fue una presión importante para la salida de Banzer. Este acontecimiento abrió una esperanza de apertura democrática, sin embargo, tal expectativa se extinguió dos años más tarde con la masacre de cientos de manifestantes en La Paz por parte de las Fuerzas Militares en noviembre de 1979.

A la caída de Banzer, el movimiento indígena y campesino retornó al campo de los intereses populares. Desde enero de 1974 el movimiento campesino había retirado su apoyo a la dictadura al constatar que había perdido su capacidad de interpelación ante el Estado, cuando presencié la Masacre del Valle o de Tolata en la que ochenta campesinos fueron asesinados cuando protestaban bloqueando las vías. En 1979, las tres organizaciones campesinas existentes en ese momento se fusionaron para dar lugar a la fundación de la Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).

Después de la sangrienta represión de fines de 1979, se generó un nuevo compás de apertura democrática y un proceso electoral en junio de 1980 en el que se impuso Hernán Siles Zuazo por la Unidad Democrática y Popular (UDP), la negativa de la oligarquía y las Fuerzas Armadas a aceptar los resultados propició un nuevo golpe de Estado. En dichas elecciones contendieron Víctor Paz Estenssoro por la coalición MNR-Histórico, el

exdictador Hugo Banzer por el partido Acción Democrática Nacionalista (ADN), y Marcelo Quiroga por el Partido Socialista Uno (PS-1). Siles Zuazo ganó las elecciones, sin embargo, no alcanzó el porcentaje requerido para obtener directamente al gobierno, de tal forma que el nuevo presidente debía ser designado por el Congreso. Los sectores parlamentarios del MNR-H y el PS-1 anunciaron su adhesión a Siles Zuazo, ante esta decisión, la alianza conformada por la oligarquía, las Fuerzas Armadas y la mafia respondieron con un golpe de Estado. La dictadura de García Meza intervino a la COB, suspendió los derechos sindicales, desapareció al dirigente popular Marcelo Quiroga, e impuso un “pacto social entre empresarios y trabajadores” que estableció los “coordinadores laborales” en reemplazo de los dirigentes sindicales. En un lapso muy breve, los estrechos vínculos de la dictadura de Luis García Meza con la mafia derribaron al gobierno por la presión del propio gobierno estadounidense.

Las dictaduras, de Banzer a García Meza, destruyeron las diversas expresiones orgánicas del movimiento popular y propiciaron las condiciones que desembocaron en la implantación de un Estado abiertamente criminal y genocida. Entre las acciones represivas más cruentas de este período se cuentan los 100 muertos del 21 agosto de 1971, las matanzas de Tolata, Epizana y Melga en 1974, y la masacre 200 manifestantes en el centro de La Paz el 1° de noviembre de 1979.

La histórica dualidad del poder en Bolivia, de la que habla Zavaleta³², entre las masas y las Fuerzas Armadas, culminó con un saldo macabro de masacres que replegaron al movimiento popular y cercenaron sus avances. Como en la mayor parte de América Latina, la fuerza y la violencia de las armas del Estado le abrió el camino a las reformas neoliberales que abrían de desarrollarse en los años ochenta.

4. LOS CAUCES DEL INDIGENISMO (1973-2005)

Desde comienzos de los años sesenta, hubo malestar entre las organizaciones indígenas frente a

³⁰ *Ibidem*.

³¹ Jean Pierre Lavaud, *La dictadura minada: la huelga de hambre de las mujeres mineras Bolivia 1977-1978*, La Paz, Plural, 2003. También el trabajo testimonial de Moema Viezzer, *Si me permiten hablar... Testimonio de Domitila, una mujer en las minas de Bolivia*, México, Siglo XXI, 1980.

³² Ver al respecto: Zavaleta Mercado, René, *El poder dual*, Siglo XXI México 1979.

las realizaciones del MNR, por ejemplo, se cuestionó la política de reforma agraria ya que su objetivo principal fue la creación de una masa pequeña de propietarios privados antes que la defensa del *ayllu*, cuando la expectativa frente a la reforma radicaba en la potenciación de la comunidad a través de la titulación colectiva de la tierra.

En este ambiente fue publicado por Fausto Reynaga en 1969 “El Manifiesto del Partido Indio de Bolivia” (PIB), en él, Reynaga, quien se expresa a favor de una sociedad indígena libre de la influencia mestiza y colonial, idealiza los valores comunitarios buscando retornar a un pasado mítico donde halla la razón de ser de las luchas indígenas.

El movimiento indigenista emergió con notable vigor en el marco de la ofensiva militarista contra el movimiento obrero. La mayor parte de este movimiento se aglutinó en torno al katarismo³³, el cual se dio a conocer por medio del Manifiesto de Tiwanako en 1973, allí se planteaba: “Nosotros los campesinos quechuas y aymaras, lo mismo que de otras culturas autóctonas del país, decimos lo mismo. Nos sentimos económicamente explotados y cultural y políticamente oprimidos. En Bolivia no ha habido una integración de culturas sino una superposición y dominación, habiendo permanecido nosotros en el estrato más bajo y explotado de la pirámide”³⁴. El katarismo nutre sus reivindicaciones de la memoria de las rebeliones anticoloniales de Túpac Katari³⁵ y Bartolina Sisa hacia 1781, también está presente Pablo Zarate Wilka quien en 1899 condujo a los indígenas, aliados a los liberales, que dieron las batallas decisivas para derrotar a los conservadores en la guerra federal.

Con el retorno de los procesos electorales, el movimiento indígena enfrentó una fuerte pugna de

concepciones estratégicas y se escindió en dos sectores, un sector tomó la vía electoral, mientras que el otro siguió el camino de la lucha armada.

En las elecciones de 1979 y 1980, el sector liderado por Jenaro Flores, Víctor Hugo Cárdenas y Wilson Reynaga agrupado en el Movimiento Revolucionario Túpac Katari de Liberación (MRTKL), obtuvo diputaciones y en 1985, alcanzó cargos de municipales en algunas administraciones locales del altiplano y dos diputaciones en el parlamento. En 1988, Flores se apartó del movimiento y fundó el Frente Unido de Liberación Katarista (FULK). En 1993, Víctor Cárdenas propinó un duró revés orgánico al katarismo al acompañar a Gonzalo Sánchez de Lozada como candidato a la vicepresidencia.

En septiembre de 1989 otro sector orientado por Felipe Quispe y Álvaro García Linera fundó el Ejército Guerrillero Túpac Katari (*ayllus rojos*) que realizó algunas acciones armadas. En 1991 estos fueron capturados y permanecieron presos durante cinco años, al salir de la cárcel, se incorporaron a la actividad política legal.

El liderazgo de Quispe ha sido influyente en el altiplano, siendo muy fuerte en municipios como Warisata, Sorata y Achacachi, donde ocurrieron los levantamientos de abril del 2000, y de junio-septiembre de 2001. Quispe ocupó, desde 1998, la secretaría ejecutiva de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).

La división entre los liderazgos de Evo Morales y Felipe Quispe, que venía desde mediados de los noventa, se afirmó en 2001 cuando la disputa por la dirección de la CSUTCB, dio origen a dos vertientes organizativas, la de los sindicatos cocaleros³⁶

³³ Ver al respecto: “Las luchas campesinas contemporáneas en Bolivia: El movimiento katarista 1970-1980”. *En Bolivia Hoy*, México Siglo XXI, 1983, y “De la democracia liberal a la democracia del ayllu”, en *Bolivia a la hora de la modernización*, México, Centro Coordinador y Difusor de Estudios Latinoamericanos UNAM, 1993.

³⁴ Guillermo Bonfil Batalla, *Utopía y revolución. El pensamiento político contemporáneo de los indios en América Latina*, México, Nueva Imagen, 1981, 216.

³⁵ Túpac Katari (cuyo nombre era Julián Apasa) encabezó una rebelión que tuvo epicentro en El Alto entre marzo y agosto de 1781 en contra del gobierno colonial. Apasa tomó el nombre de Tomás Catari quien fue asesinado por las autoridades coloniales en enero de 1781, y lideró junto con su esposa Bartolina Sisa y sus hermanos Damaso y Nicolás, una rebelión contemporánea con la de Túpac Amaru en el Perú. Finalmente fue apresado y descuartizado por el gobierno colonial. Ver Carlos Daniel Valcárcel, *Rebeliones coloniales sudamericanas*, Fondo de Cultura Económica, 1982. También: Scarlett O’phelan Godoy, *La gran rebelión de los Andes: de Túpac Amaru a Túpac Catari*, Cuzco 1995, y *Un siglo de rebeliones anticoloniales*, Perú y Bolivia 1700-1783, Cuzco, Centro de Estudios Andinos Bartolomé de Las Casas, 1988.

³⁶ Sobre los antecedentes del movimiento cocalero puede verse el artículo: Mala, Sárka, “El movimiento ‘cocalero’ en Bolivia durante los años 80 y 90: sus causas y su desarrollo”, *Revista Esbozos* Volumen 15 No.20 (2008), Universidad Federal de Santa Catarina.

agrupados en las seis Federaciones del Trópico de Cochabamba y la de los Yungas que responden a la dirección de Evo Morales; y el Movimiento Indígena Pachakuti (MIP) fundado por Quispe, el cual participó en diversos procesos electorales alcanzando asiento en el parlamento en 2002, su programa plantea un renacimiento de la cosmovisión que denomina *Pachakuti*.

La CSUTCB desarrolló un intenso proceso de protestas en la región del altiplano y en el trópico cochabambino, la acción del movimiento indígena y campesino estuvo dirigida en contra de las políticas neoliberales sobre el sector agrario, el rechazo de la política antidrogas ejecutada por el gobierno y la reivindicación de autonomía territorial y el derecho a las formas de gobierno con base en el sistema tradicional de usos y costumbres (sistema de autoridades indígenas, métodos de manejo productivo, y prácticas rituales).

El movimiento aymara defiende la vigencia del *ayllu*, del *ayni* o rotación de cargos de autoridad comunitaria, de las *markas* o el conjunto de *ayllus*, del *apthapi* o el comer en comunidad, y del manejo ecológico de los pisos térmicos, para este el desarrollo, *es suma tamaña*, que significa vivir bien, en armonía social y con la naturaleza. La relativa autonomía alcanzada por los aymaras, les ha permitido cohesionar la protesta a partir de los lazos de solidaridad propios de la vida comunitaria y avanzar en la consolidación de una territorialidad autogestiva.

Uno de los intelectuales que sostiene de manera más contundente las reivindicaciones indígenas es Pablo Mamani, para él: “Bolivia se funda en 1825 como país sin la presencia política e institucional de los pueblos indígenas. En determinados períodos históricos se ha tratado de incorporar a los indios al Estado, pero sin reconocer su historia, sus memorias sociales y culturales, sus héroes indios y territorios, tanto andinos como amazónicos. Y ante la persistencia de estos mecanismos de dominación étnica y explotación económica de las economías de los ayllus y comunidades (tributo, mano de obra, servicio militar) los pueblos indígenas han insistido muchas veces en querer dialogar y construir pactos reales. Pero esto no ha sido posible, por las construcciones raciales del poder. Hasta hace

algunos años se percibía al indio, y ello persiste hasta hoy, como no apto para hacer política y hacer ejercicio de su ciudadanía. El indio o india sólo era importante como albañil, como pongo o empleada doméstica.

De esta manera, estas construcciones sociales del poder han creado profundas fronteras históricas entre el mundo social indígena y el mundo social blanco-mestizo. Y lo que ocurre hoy es que estas construcciones se rompen y se hacen visibles socialmente”³⁷.

En el transcurso de cuatro décadas, el movimiento indigenista experimentó sucesivas mutaciones en sus aspectos organizativos e ideológicos. En su seno coexistieron tendencias que tomaron vías divergentes, como la insurreccional y la institucional. Lo más característico del katarismo ha sido su movilidad táctica y estratégica, la cual se modifica rápida y reiteradamente yendo de la participación electoral al abstencionismo, o de la acción parlamentaria a la protesta. En síntesis, el aspecto más característico del movimiento indigenista es su heterogeneidad y la diversidad de ideas con las que se juntan las reivindicaciones indígenas, por ejemplo, el autonomismo y el pachamamismo.

El indigenismo en su versión más radical, aquella que niega la posibilidad de un Estado liberal y mestizo, reproduce en una escala –territorial y social– menor la concepción nacionalista que ha sido una constante en el pensamiento político boliviano. Los elementos aglutinantes del indigenismo, son como en el nacionalismo, la lengua, el pasado común, las tradiciones y costumbres, con ellos se ha compuesto una idea de estatalidad que tiende a la idealización del mundo prehispánico.

5. LA “TRANSICIÓN” A LA DEMOCRACIA NEOLIBERAL (1982-2006)

Después de casi dos décadas de represión sobre el movimiento popular retornó en 1982 la democracia representativa y con ella un nacionalismo revolucionario domesticado por la hegemonía estadounidense y dócil a los mandatos neoliberales de la época. Fue precisamente durante el gobierno de Víctor Paz Estensoro³⁸, quien fuera el primer

³⁷ Pablo Mamani, *El rugir de las multitudes*, El Alto, Qullasuyo, Yachaywasi, 2004, 181.

³⁸ Andrés Soliz Rada, “Paz Estensoro: del nacionalismo al coloniaje”, *Revista Patria Grande*, La Paz Bolivia, No.3 (Octubre de 1985). Disponible en: [www.patriagrande.org.bo] (Con acceso el 21-08-09)

presidente luego de la revolución del 1952, que las políticas neoliberales fueron emprendidas.

En 1985 en desenvolvimiento de la Nueva Política Económica fueron desmanteladas la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), la Empresa Nacional de Fundiciones (ENAF), el Complejo Metalúrgico Karachipampa y la Empresa Nacional de Transporte Automotor (ENTA). La liquidación de estas empresas dejó sin empleo a 24 mil trabajadores mineros y 10 mil obreros industriales. Una década más tarde, la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) fue dividida, y cada una de las actividades de la cadena productiva; exploración, explotación, distribución y refinación de hidrocarburos, pasaron a manos de compañías privadas.

En el contexto de avance de las reformas neoliberales, el movimiento obrero, bastante debilitado después de décadas de represión y sustracción de su base orgánica por medio de los despidos, y el movimiento indígena y campesino experimentaron notables cambios que marcaron el panorama para las luchas de los años noventa. Los despidos de trabajadores mineros dieron la pauta para el engrosamiento de la colonización cocalera en el Chapare y los Yungas y el crecimiento de la migración urbana hacia la ciudad de El Alto. Estos dos fenómenos de movilidad social y laboral habrían de nutrir las formas orgánicas del movimiento popular en el transcurso de 1996 a 2005.

La colonización cocalera también fue reprimida, en 1988, el gobierno de Paz Estenssoro promulgó la ley 1008 dirigida a poner en marcha las

políticas de interdicción orientadas por los Estados Unidos³⁹.

Al gobierno de Víctor Paz Estenssoro (1985-1989) le sucedieron los gobiernos de Jaime Paz Zamora (1989-1993) del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997) apoyado por una alianza en la que participó el MNR, el exdictador Hugo Banzer (1997-2001) de Acción Democrática Nacionalista (ADN) y Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003). Los diversos gobiernos que se instauraron desde 1985 debieron recurrir a pactos en el Parlamento para obtener la presidencia ya que ninguno obtuvo el respaldo necesario mediante el voto popular. Todos estos gobiernos fueron fieles a los mandatos de los organismos financieros internacionales y la aplicación de las reformas neoliberales. El cenit de las reformas lo colocó Sánchez de Lozada con la política de capitalización aplicada durante su primer gobierno en 1995, y posteriormente, con la política de entrega de los yacimientos de gas durante su segundo gobierno en 2003. La capitalización fue el término con el que eufemísticamente se catalogó la venta del cincuenta por ciento de numerosas empresas estatales.

Con el proceso de privatización, el Estado perdió fuentes vitales de ingreso y en un lapso muy breve de tiempo fue acosado por la crisis fiscal. Los gobiernos de Hugo Banzer (1997-2001), y posteriormente, el de Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003) trataron de resolver el déficit fiscal implantando alzas⁴⁰ en los precios de los hidrocarburos, creando nuevos impuestos⁴¹ y privatizando las empresas del Estado y los recursos energéticos.

³⁹ A pesar que desde 1973 existían instituciones consagradas a la represión del cultivo de la coca, sólo en 1988 fue expedida la primera ley de interdicción, la ley 1008 del régimen de coca y sustancias controladas. En 1997, el gobierno Banzer dio desarrollo al "Plan Dignidad" con el cual estableció la erradicación forzosa de los cultivos de coca y la presencia permanente de bases militares norteamericanas para asesorar su ejecución.

Ver al respecto: Berniola, Susana, El conflicto cocalero en Bolivia como resultado del imperialismo estadounidense, *Nomadas Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas* No.27 (2008), UNAM México.

⁴⁰ El 5 de diciembre de 1997, en el comienzo de su gestión el gobierno del General Hugo Banzer (1997-2001) decretó el alza de los impuestos a los hidrocarburos en un 28% y fijó un mecanismo de ajuste automático de los precios de los derivados de los hidrocarburos en función de las fluctuaciones del precio internacional de petróleo. Mirko Orgaz, *La guerra del gas*, La Paz C&C editores, 2002, 196.

⁴¹ En febrero de 2003 durante el segundo período de gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, se decretó un impuesto sobre los salarios. La medida establecía el cobro de un 4,2% de impuesto a los salarios que fueran superiores a dos salarios mínimos, es decir, 880 bs. (bolivianos), y un 12% de impuesto a los salarios superiores a bs. 20.000. El salario mínimo nacional era de bs. 440 (equivalente a 58 dólares) y el salario promedio mensual era de bs. 933 (123 dólares). De un total de 1.041.000 trabajadores asalariados en Bolivia, 597.660 quedarían gravados con el impuesto del 12% sobre sus ingresos. La disposición fue anulada por la protesta social que repudió el impuesto y denunció la política antisocial puesta en marcha por el gobierno para resolver el déficit del 7% en las finanzas públicas. Pablo Mamani, *El rugir de las multitudes*, El Alto Qullasuyu, Yachaywasi, 2004, 114.

En octubre de 2003, la venta de gas a Chile configuró las condiciones para que irrumpiera un intenso movimiento de protesta que duró dos semanas. La represión estatal sobre el movimiento de protesta causó la muerte a 66 manifestantes generando el acrecentamiento de las protestas y la parálisis de las actividades productivas, lo que condujo a la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.

La guerra del gas, como se conoció el movimiento de protesta, marcó un quiebre en la profundización del neoliberalismo y abrió la transición a una nueva etapa caracterizada por la recuperación de la soberanía nacional y el papel empresarial del Estado. Luego de dos años de profunda decadencia del régimen político, en diciembre de 2005, se llevaron a cabo elecciones presidenciales.

La imposibilidad de ahondar las políticas neoliberales sin llevar a cabo una vasta represión sobre el movimiento popular gestado en el transcurso de dos décadas de oposición a las reformas, se tradujo en la profunda ilegitimidad que condujo a la caída no sólo de un gobierno sino del conjunto de partidos surgidos en el transcurso de los años ochenta, los cuales representaban los intereses oligárquicos forjada al amparo de los asuntos del Estado en la segunda mitad del siglo XX.

6. EL RETORNO DE UN PROYECTO PROGRESISTA: MAS (2006-2010)

El MAS fue fundado a mediados de los noventa en la concepción de ser un instrumento político articulador de los movimientos sociales⁴². Con una notable presencia en el Chapare y una gran capacidad de movilización entre el campesinado, el MAS desarrolló un metódico proceso de proyección a escala nacional. En las elecciones presidenciales del 2002, el MAS, con un 21% de los votos, dio un campanazo de alerta a los partidos de los sectores económicamente dominantes, el MNR, la Nueva Fuerza Republicana (NFR) y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), estos obtuvieron 22,5%, 21% y 16,5%, respectivamente. A nivel regional el avance del MAS fue ver-

iginoso, pues alcanzó el gobierno en 280 de los 318 municipios del país.

En las elecciones presidenciales del año 1993, los partidos tradicionales MNR, MIR y ADN obtuvieron en La Paz, Oruro, Potosí, y Cochabamba, un 71% de los votos, en el 2002 este caudal se redujo a un 35%⁴³. Es decir, el avance electoral del MAS fue directamente proporcional al desgaste y deslegitimación de los partidos políticos vigentes.

En coyunturas de profunda crisis política, como la guerra del gas, el MAS se distinguió por acatar los marcos institucionales en la búsqueda de soluciones. En el año 2005, en medio del profundo desbarajuste estructural del régimen político la salida a la crisis estatal se resolvió adelantando el calendario electoral. En diciembre de 2005, Evo Morales candidato del MAS alcanzó 54% de los votos, Jorge Quiroga del partido Podemos 29% y Samuel Doria 8%. En el Congreso de la República, el MAS obtuvo 12 de 27 senadores y 64 de 130 diputados en la Cámara. El triunfo de Morales fue en gran medida el resultado de la lucha de movimientos y organizaciones populares (indígenas, campesinas, vecinales, sindicales) opuestas al avance de las políticas neoliberales.

Cuatro meses después de asumir el gobierno, el presidente Evo Morales expidió el decreto No. 28701 de nacionalización de los hidrocarburos con el cual ratificó la propiedad estatal de los mismos, refundó la empresa estatal YPFB, recuperó el control del 51% de las acciones de las empresas privatizadas (Chaco SA, Andina SA, Transredes SA, Petrobras Bolivia Refinación SA y Compañía Logística de Hidrocarburos de Bolivia SA), y reformó la estructura de reparto de la renta gasífera⁴⁴.

El gobierno del MAS, en medio de una intensa ofensiva de la oligarquía cruceña que se extendió durante los años 2007 y 2008, emprendió importantes cambios en diversos frentes, entre los que cabe destacar: la reestructuración del aparato de Estado, la política energética para recuperar la renta

⁴² Marta Harnecker, *MAS-IPSP de Bolivia Instrumento político que surge de los movimientos sociales*, Caracas, Centro Internacional Miranda, 2008.

⁴³ De La Fuente, Manuel. "Del reino del neoliberalismo a la insurgencia de los indígenas y campesinos". *Revista OSAL* No.5 (Septiembre, 2001).

⁴⁴ Decreto 28701 de nacionalización de los hidrocarburos, Bolpress, 1 de mayo de 2006. Disponible desde Internet en: <http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2006050115> (Con acceso el 21-08-09).

y el control de los hidrocarburos⁴⁵, y la política exterior orientada a dar un viraje de la adscripción pro-estadounidense hacia un escenario favorable a la integración latinoamericana. Para reestructurar el Estado se realizó una Asamblea Nacional Constituyente que expidió un nuevo marco constitucional, entre los cambios más significativos producidos con la nueva Constitución Política y sus posteriores desarrollos estuvieron: el reconocimiento de los pueblos indígenas y sus derechos sobre el territorio, la democratización de la rama judicial del poder público⁴⁶, el establecimiento de topes a la tenencia de tierras⁴⁷, y la asunción de una política de seguridad y defensa acorde al proyecto nacionalista, democrático y popular impulsado por el MAS. A mediados del año 2010 se aprobaron cinco leyes estructurales de la reforma del Estado tendientes a establecer: una nueva organización del órgano judicial, el establecimiento del Tribunal Constitucional, el nuevo régimen electoral, la ley del órgano electoral plurinacional y la ley marco de autonomías y descentralización.

La recuperación de la renta energética fue impulsada con la aplicación del decreto No. 28701 por el cual se modificó la estructura de los ingresos generados por la explotación del gas. Tales ingresos pasaron a ser distribuidos así: 82% para el Estado (18% de regalías y participaciones, 32% de Impuesto Directo a los Hidrocarburos IDH y 32% a través de una participación adicional para YPFB), y 18% para las compañías (que cubre costos de operación, amortización de inversiones y utilidades). Dicha norma rige para los campos con producción superior a los 100 millones de pies cúbicos diarios.

La política de nacionalización fue complementada con una política de migración de contratos y renegociación de los precios del gas con los gobiernos de Brasil y Argentina, estados a donde va

la mayor parte de las exportaciones de gas. Entre 2001 y 2008, las explotaciones de gas casi se triplicaron al pasar de 13,4 a 35,9 millones de metros cúbicos diarios, de los cuales, la mayor parte tiene como destino Brasil con un 73%.

A tres años de haberse iniciado la aplicación de la nueva política energética, el gobierno del MAS ha obtenido avances como la refundación de la empresa estatal YPFB, la recompra de las empresas del sector hidrocarburos antes privatizadas por medio de la transferencia del 51% de las acciones provenientes de las empresas privatizadas a YPFB, y el incremento de la renta para el Estado. La política energética del MAS ha enfatizado en la reglamentación de la explotación de los recursos naturales, pero conservando e intensificando el viejo modelo primario exportador, que es plenamente funcional a la división internacional del trabajo y la producción vigente durante siglos. Es decir, al sostenimiento del capitalismo dependiente⁴⁸.

A las modificaciones agenciadas en la estructura del Estado y la política energética hay que agregar la reorientación en la política exterior. En esta materia el gobierno de Evo Morales ha cuestionado la pervivencia del imperialismo, insistiendo en la necesidad de una política antidrogas de corte pacífico, el gobierno de Morales se ha inscrito asimismo en lo que se podría denominar el bloque latinoamericanista constituido por gobiernos progresistas. En esta perspectiva ha acompañado la iniciativa para el re-direccionamiento de la Organización de Estados Americanos (OEA) y ha hecho parte de la construcción de la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA).

En diciembre de 2010 el gobierno del MAS trató de imponer un decreto de alza en los hidrocarburos, con esta medida suscitó un malestar generalizado entre sectores afines. De inmediato se identificó la gestión del MAS con las políticas neo-

⁴⁵ Para una exposición más detallada del itinerario que condujo de la privatización a la nacionalización del gas, puede consultarse el artículo: El gas de Bolivia de la privatización a la nacionalización de José Honorio Martínez, en *Revista Historia Actual*, Volumen 7 No.7 (2009), Universidad de Cádiz.

⁴⁶ Bolivia elige 52 autoridades judiciales por voto directo, abril 28 de 2011. Disponible desde Internet en: [<http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2011042802>] (Con acceso el 28-04-11)

⁴⁷ A pesar del establecimiento de disposiciones que limitan la tenencia de tierras, el último Informe de la Fundación Tierra da cuenta de un acelerado proceso de concentración de tierras. Ver al respecto: Bolivia: más de un millón de hectáreas en manos de extranjeros, 28 de marzo de 2011. Disponible desde Internet en: [<http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2011032817>] (Con acceso el 30-03-2012)

⁴⁸ Asumimos este concepto en la perspectiva que le dan: Bambilra, Vania, El capitalismo dependiente latinoamericano, Siglo XXI, México 1999, y Marini, Ruy Mauro, Subdesarrollo y revolución, Siglo XXI, México, 1974.

liberales de los gobiernos anteriores. La presión popular llevó al retiro del decreto, sin embargo, se mostró la existencia de inconsistencias y contradicciones sobre la orientación del proceso político iniciado en 2006. Posteriormente, en abril de 2011, el gobierno decretó el incremento de salarios a los trabajadores públicos (Policía, Fuerzas Armadas, maestros y sector salud) en 10%, frente a dicha medida la COB convocó a movilizaciones y protestas a favor de un incremento mayor y un pliego que incluyó otras exigencias⁴⁹. El movimiento de protesta logró un incremento salarial del 11% y comprometió al gobierno con otra serie de puntos tendientes a profundizar la nacionalización y la recuperación del excedente para el desarrollo de Bolivia⁵⁰.

La coyuntura en la que ingreso el proceso político en abril de 2011 puso en evidencia la fragilidad de la cohesión política del campo popular, mostrando que la capacidad de incidencia del gobierno sobre el movimiento sindical es bastante limitada. El proceso abierto centró nuevamente el debate en cuáles son las perspectivas en las que se inscribe el proyecto político del MAS.

CONCLUSIÓN

Un aspecto característico del proceso político boliviano, desde los años cuarenta hasta los años ochenta, fue la dificultad de las clases dominantes para representarse por medio de partidos relativamente estables, dicha dificultad obedeció en gran medida al carácter de enclave de la economía minera, y a las condiciones derivadas de esta forma de articulación al sistema mundial sobre la formación y la representación de las clases sociales en los procesos políticos. La debilidad orgánica de la oligarquía –minera y terrateniente– para gestionar sus

intereses por medio de organizaciones partidarias propias dio gran relevancia a las Fuerzas Armadas como estamento mediador de tales intereses⁵¹. Prácticamente hasta 1982, las Fuerzas Armadas actuaron como la instancia más decisiva en la determinación del curso del proceso político. La centralidad de las Fuerzas Armadas dentro del proceso político contribuyó a que en su seno perviviera la disputa ideológica y política entre tendencias progresistas y reaccionarias⁵².

El nacionalismo militar tuvo importantes repercusiones sobre el proceso político al generar las condiciones para el surgimiento del nacionalismo revolucionario y para el avance organizativo de la clase obrera minera. En la medida que el nacionalismo militar fue abanderado por caudillos o pequeñas logias, tal movimiento careció de la potencialidad orgánica suficiente para instaurar una hegemonía en el transcurso del siglo XX, de hecho, acabó por imponerse desde 1971 un nacionalismo militar reaccionario, valga decir antinacional, plegado a los intereses oligárquicos e imperialistas.

El nacionalismo revolucionario (MNR) cumplió una importante función histórica como ideología dinamizadora de una serie de reformas modernizadoras, sin embargo, fue también una especie de lastre que apaciguó y frenó cualquier posibilidad de salto cualitativo en el proceso revolucionario. Al contrario, endosó tempranamente (1956) el proceso político a los intereses de los organismos financieros, las corporaciones transnacionales y la geopolítica estadounidense.

Con una fuerte incidencia ideológica del nacionalismo militar y el revolucionario, los partidos de izquierda, así como los movimientos obreros y campesinos tuvieron grandes dificultades para emprender experiencias organizativas independien-

⁴⁹ La COB masifica protestas con bloqueos de caminos, abril 12 de 2011. [<http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2011041209>] (Con acceso el 30-03-2012).

⁵⁰ Decreto de eliminación de toda la legislación fundamentada en el 21060. [<http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2011050110>] (Con acceso el 30-03-2012)

⁵¹ Esta tesis es sostenida por Agustín Cueva refiriéndose a una experiencia que ha sido común en diversos estados latinoamericanos, para ampliar al respecto ver: *El desarrollo capitalista en América Latina*, México, Siglo XXI, 2007.

⁵² El concepto “reaccionarias” es tomado de la distinción que establece Agustín Cueva entre una modalidad reaccionaria y una modalidad progresista del desarrollo capitalista. En el primer caso, las garantías civiles y los derechos sociales de los trabajadores son restringidos por la legalidad imperante, generalizándose la represión sobre la sociedad en su conjunto. En el segundo caso, los regímenes políticos dan apertura a un orden jurídico en el que se respetan las garantías civiles y los derechos sociales, atendándose las demandas de las organizaciones sociales y produciéndose el reconocimiento de los derechos políticos al conjunto de la sociedad. Agustín Cueva, *El desarrollo del capitalismo en América Latina*, México, Siglo XXI 2007, 148.

tes. En este sentido, la táctica de la alianza se impuso como una constante, sin embargo, la precariedad de la unidad en torno a los aspectos programáticos minó las potencialidades transformadoras.

Las fuerzas políticas de derecha emplearon con éxito la maniobra de la división y la cooptación para dar al traste con los procesos de cambio. El caso más sobresaliente de esta experiencia fue el uso del movimiento campesino contra el movimiento obrero durante las dictaduras de Barrientos a Banzer.

En circunstancias en las que hegemonizaba el discurso sobre “el fin a la historia”, Bolivia, como la mayor parte de América Latina, experimentó en los años noventa nuevas convulsiones populares, fruto de la dialéctica de los procesos sociales. En el transcurso de dos décadas el movimiento popular se recuperó de un largo período de masacres y genocidios, así re-surgieron los movimientos y las organizaciones populares en reivindicación de los intereses nacionales, democráticos y populares.

El rechazo a la política intervencionista de los Estados Unidos en materia de drogas, abrió en 1996 un ciclo de luchas populares a las que se sumaron otras causas la recuperación de los recur-

sos naturales que culminaron en 2005 con las movilizaciones que obligaron a la renuncia del gobierno transitorio y la convocatoria a elecciones.

En estos términos, el gobierno de Evo Morales representa un resurgimiento del campo popular. El triunfo del MAS situó en primer plano el problema de la reestructuración del Estado, problema que entronca con la discusión acerca del carácter nacional y las formas de inclusión y composición de las distintas manifestaciones del movimiento popular en un bloque político hegemónico. En dicho bloque convergen el nacionalismo, el clasismo proletario y el indigenismo, ¿cómo componer las distintas aspiraciones y sus búsquedas históricas? He ahí el problema de la reconstrucción del Estado en Bolivia.

El resurgimiento popular boliviano cuenta con un contexto regional y mundial favorable caracterizado por el ascenso de las fuerzas progresistas en América Latina y la crisis de la hegemonía estadounidense. Estas condiciones dan la pauta para la articulación e integración con otros procesos y experiencias de la región y la consolidación de un programa que avance en la realización de una revolución democrática popular que sienta las bases para la transición al socialismo.